



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO CIRCUITO DE MEDELLÍN

Sentencia No.008

Medellín, 18 de enero de 2024.

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandantes | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |
| | |
| Decisión | Concede amparo- derecho de petición y debido proceso |

1.1. Demanda

El señor **Mauricio Gil Mesa**, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la **UT Convocatoria FNG 2022 y la Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación**, solicitando: **i)** la protección de su derecho fundamental de petición, debido proceso administrativo y a ocupar cargos públicos; y que **ii)** se ordene a las accionadas lo siguiente:

“i) (...) ORDENE a UT convocatoria FGN 2022, responder de fondo la reclamación número 2023100004610 elevada por el suscrito. Con ocasión a dicha respuesta, que UT convocatoria FGN 2022 se pronuncie respecto a los convenios vigentes entre la Fiscalía General de la Nación y Banco de la República, así como la normatividad relacionada con el Banco Agrario, ambos en materia de depósito en custodia de moneda nacional, por parte de la Fiscalía General de la Nación.

ii) En virtud de la respuesta de fondo que su honorable despacho, si a bien lo tiene ordene emitir, y en amparo al debido proceso administrativo, igualmente ORDENE a UT convocatoria FGN 2022, calificar de manera objetiva el ítem 139, teniendo en cuenta los elementos normativos y convenios mencionados en desarrollo de la presente acción. Y tenga en cuenta la respuesta señalada por el suscrito en desarrollo de la prueba funcional aludida. Finalmente, pase a recalificar mi puntaje final.

iii) En defecto de lo anterior, y en aras a la protección del debido proceso administrativo en ejercicio del presente concurso de mérito, se ORDENE a UT Convocatoria FGN 2022, evaluar la posibilidad de eliminar el ítem 139 de la prueba funcional para la OPECE I-212-02 (146) Técnico Investigador IV, y en virtud de ello, recalificar y emitir puntaje final con base en las 99 preguntas restantes.

Nota: Cabe mencionar que, los numerales ii) y iii) de las pretensiones, de manera general cuentan con la cobertura de 'respuesta de fondo' que se requiere a mi derecho de petición

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FGN 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

vulnerado. Esto, en la medida que dichas solicitudes fueron impetradas durante el ejercicio de mi reclamación ante UT convocatoria FGN 2022. Sin embargo, se solicitan de manera expresa en la presente acción constitucional, con el fin de velar por la correcta contestación de las mismas.”

Dijo que mediante acuerdo N°001 del 20/01/2023, la Fiscalía General de la Nación (en adelante FGN) convocó a concurso de méritos para proveer 1056 vacantes definitivas en las modalidades de ascenso e ingreso de la planta de personal de la entidad, suscribiendo para el efecto, contrato con la "Unión Temporal (UT) convocatoria FGN 2022.

Refirió que se inscribió para el empleo OPECE I-2012-02 (146) Técnico Investigador IV, al cual fue admitido para llevar a cabo pruebas escritas.

Indicó que el 10 de septiembre de 2023 presentó pruebas escritas, resultados que fueron publicados el 24 de octubre de 2023, donde obtuvo un puntaje superior al mínimo aprobatorio.

Afirmó que el 20 de noviembre de 2023 a través del aplicativo SIDCA2, formuló reclamación con rad 2023100004610, sobre 3 preguntas frente a las cuales solicitó su revaloración.

Enfatizó que una de las preguntas objetadas fue la # 139, respecto a la cual el operador del proceso de mérito UT Convocatoria FGN 2022 indicó que la respuesta correcta era la opción c, explicando las razones de ello.

Argumentó el actor que la opción c no es correcta y que la respuesta más cercana a la realidad teórica y práctica es la contemplada en el literal B.

En el análisis del caso dijo que la UT convocatoria FGN 2022, no se pronunció de fondo sobre la reclamación:

“UT convocatoria FGN 2022 refiere solo la razón que considera asertiva y que le daría fundamento a su respuesta, citando la Circular Reglamentaria DTE-309 de 2013.

Brilla por su ausencia en su respuesta, lo concerniente al Convenio interadministrativo número 00761700 entre Fiscalía General de la Nación y Banco de la República al que les hago referencia, expedido con posterioridad a la circular en cita, que regula el depósito en custodia de oro, plata, platino y divisas (no moneda colombiana), y que aclararía de fondo mi reclamación.

Asimismo, ignora por completo el planteamiento respecto a que, es realmente el Banco Agrario de Colombia, la entidad bancaria encargada de recibir en calidad de depósito en custodia la moneda nacional incautada en ejercicio de estos procesos penales. UT convocatoria FGN 2022, no se tomó la tarea de realizar el mínimo pronunciamiento al respecto.

Tampoco hace alusión a mi precisión respecto a que, debido a mi experiencia como servidor adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación, he tenido la oportunidad de efectuar dichos procedimientos, lo que me otorga la posibilidad de hablar sobre este asunto desde la práctica. Esto por lo menos, para captar su atención e invitarlos a realizar una revisión detallada de mi reclamación.

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

UT convocatoria FGN 2022 señala que resuelve de fondo mi petición, pero esto se queda solo en palabras, en la medida que no resuelve materialmente mi solicitud, pues deja por fuera todos y cada uno de mis argumentos, los cuales debieron ser objeto de una minuciosa valoración y contradicción, lo que vulnera de manera flagrante mi derecho fundamental a la petición en los términos que ha venido reiterando nuestro máximo Tribunal Constitucional.”

1.2. Trámite procesal

Mediante providencia del 18 de diciembre de 2023, se admitió la tutela, se ordenó la notificación a las autoridades demandada y se ordenó requerirlas para que en el término de 2 días se pronunciaran en torno a los hechos de la demanda, y para que aportara las pruebas referentes a la misma, con las advertencias consagradas en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

Así mismo, se negó la **medida provisional solicitada**, y se dispuso la vinculación a la presente acción constitucional de la Fiscalía General de la Nación, y como terceros interesados a los admitidos al empleo OPECE I-2012-02 (146) Técnico Investigador IV del concurso de méritos para proveer 1056 vacantes definitivas de la Fiscalía General de la Nación objeto de la presente acción constitucional, para que si a bien lo tenían, se pronunciaran.

1.3. Contestación de la demanda.

1.3.1. Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación.

El Subdirector Nacional de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, dio respuesta a la tutela. Dijo que la inconformidad del accionante radica en la calificación obtenida en las pruebas aplicadas en el marco del concurso de méritos FGN 2022, frente al cual ya hizo uso del derecho de defensa y contradicción, presentando reclamación ante la U.T. Convocatoria FGN de 2022, bajo la reclamación No. 2023100004610 cuya oportunidad para ejercerlo fue desde el 25 al 31 de octubre de 2023; posteriormente, el aspirante presentó la complementación No. 2023110012613, y el 29 de noviembre de 2023 la U.T. a través de la aplicación SIDCA2, publicó las respuestas a las reclamaciones, advirtiéndole que sobre las mismas no procedía ningún recurso de conformidad al Decreto ley 020 de 2014 y el Acuerdo de Convocatoria. Argumentó que la tutela no es un medio alterno, o adicional a los instituidos por la ley para la defensa de sus intereses y que el actor debe allanarse a las reglas establecidas en el proceso de selección, máxime cuando previo a realizar la inscripción tuvo a su disposición las condiciones dadas para el concurso de méritos.

Agregó que en virtud del contrato de prestación de servicios FGN-NC-0269-2022, la U.T. Convocatoria FGN 2022, es la responsable de la ejecución del presente concurso de méritos por lo cual se le solicitó rendir el informe correspondiente, el cual adjunta.

Finalmente solicitó declarar la falta de legitimación en la causa y desvincular a la Fiscalía General de la Nación, declarar improcedente la tutela o negar las pretensiones, por cuanto no se encuentra acreditada la vulneración de los derechos invocados por el actor.

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

1.3.2. Informe U.T. Convocatoria FGN 2022.

Indicó que revisado el aplicativo SIDCA, se constató que, dentro del término establecido, el aspirante presentó la reclamación No. **2023100004610** y complementación **2023110012613**, así:

Durante la realización de las pruebas encontré varias preguntas que sugerían respuestas que no completaban el enunciado o que podrían generar confusión debido a la desactualización de algunos manuales. Uno de estos casos, tiene que ver con una pregunta relacionada con la incautación de bienes, concretamente moneda colombiana, y su posible destinación al grupo de documentología en la Sección de Criminalística o entrega al Banco de la República. Por lo anterior, de manera respetuosa, solicito me permitan acceder a las pruebas de competencias generales y funcionales, con el fin de lograr puntualizar y estructurar de mejor manera, la presente reclamación; y finalmente se pueda estudiar la posibilidad de realizar una nueva calificación que permita mejorar mi puntaje final en ejercicio del presente concurso de méritos.

Expuso que el 29 de noviembre de 2023 a través de la aplicación SIDCA2, se publicaron las respuestas a las reclamaciones de los resultados preliminares de pruebas escritas, advirtiendo que sobre esas respuestas no procede recuso alguno, como lo establece el Decreto Ley 020 de 2014 y el Acuerdo de Convocatoria, resultando improcedente a través de la acción constitucional revivir etapas que ya precluyeron y reclamar derechos que ya fueron ejercidos.

No obstante, en razón a la acción de tutela y para dar mayor claridad, informó que, revisada nuevamente la respuesta emitida el día 29 de octubre de 2023, la UT Convocatoria FGN 2022, concluye que dicha respuesta se encuentra ajustada a derecho, por lo cual reitera en su totalidad la respuesta dada el 29 de octubre de 2022, de las cuales se extraen los siguientes apartes:

3.2 Respecto a su afirmación sobre “*Abiertamente ambigüo*” El proceso de construcción de las pruebas escritas se llevó a cabo bajo el formato de Prueba de Juicio Situacional (PJS). El proceso de construcción y validación de cada ítem se desarrolla contando con cuatro (4) expertos en el área evaluada: el autor/constructor, encargado de su diseño y elaboración; los validadores pares, encargados de validar los ítems en un taller con pares, espacio de discusión técnica donde se garantiza que los ítems cumplan con todas las especificaciones técnicas y metodológicas; y el doble ciego, quien valida por tercera vez la calidad técnica y los sustentos (justificaciones) de la construcción.

Cabe mencionar que, durante este proceso, todos los expertos cuentan con el acompañamiento de un profesional de apoyo, quien es el encargado de verificar y garantizar los aspectos metodológicos esenciales del Formato de Prueba de Juicio Situacional (PJS) y adicionalmente, se cuenta con el apoyo de un corrector de estilo para la validación de cada uno de los ítems. De esta manera, durante el desarrollo del proceso se asegura que estos seis profesionales garanticen el cumplimiento de la estructura establecida para la prueba, dentro de la cual se establece que solo hay una única alternativa de respuesta correcta para cada ítem y las otras dos alternativas son enteramente incorrectas.

Dijo que no se vulneran los derechos invocados, por cuanto que el concurso se llevó a cabo conforme a la Constitución, leyes y normativas específicas; se dio respuesta las peticiones del accionante y destacó que la participación en el concurso no garantiza automáticamente el acceso a empleos, siendo solo una expectativa.

También informó el cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio, indicando que se realizó publicación en la página web mediante la plataforma SIDCA 2 del auto admisorio y el escrito de tutela y se remitió correo electrónico a los concursantes inscrito a la “I-212-02(146)”.

Finalmente solicitó declarar improcedente el amparo.

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

1.4 Intervención de terceros.

Los señores Miguel Eduardo Urrego Urrego con cedula de ciudadanía 79976133, Cleyver Alonso Arevalo López, con cedula de ciudadanía No. 80425900 y Fabio Gutierrez Sanchez, con la cédula de ciudadanía número 10.776.173 coadyuvaron la solicitud del actor.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

El Juzgado es competente para conocer de la acción de la referencia, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 1 inciso 2 del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.

2.2 Problema jurídico

Corresponde al Despacho determinar en primer lugar si la tutela es procedente, y en caso afirmativo, si las accionadas vulneran el derecho fundamental de petición, debido proceso administrativo y derecho a ocupar cargos públicos del actor, al no resolver de fondo la reclamación número 2023100004610 elevada por el accionante; y, si es procedente ordenar a UT convocatoria FGN 2022, calificar “de manera objetiva” el ítem 139, teniendo en cuenta los elementos normativos y convenios solicitados por el actor, o si es viable la exclusión de la pregunta.

2.3 Tesis del Despacho

Se encuentra procedente el estudio de fondo de la tutela; y se ampara el derecho de petición y debido proceso del accionante, en tanto la respuesta brindada por la accionada frente a la reclamación no es de fondo ni completa.

2.4 Argumentos

2.4.1 Subsidiariedad de la acción de tutela – concursos de merito

El inciso 4° del artículo 86 de la Constitución Política consagra el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela y establece que *“esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”*.

Del mismo modo, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, prevé que el amparo constitucional será improcedente, cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.

Frente al principio de subsidiariedad, la Corte Constitucional¹ ha expresado que

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-471-17.

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

« (...) en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6° del Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran vulnerados, existen algunas excepciones al principio de subsidiariedad que harían procedente la acción de tutela. La primera de ellas es que se compruebe que el mecanismo judicial ordinario diseñado por el Legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; y la segunda; que “siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela”² (...)»

Es decir, en principio es improcedente la acción de tutela cuando existe un mecanismo judicial o administrativo ordinario que puede resolver la situación planteada, a menos que dicho mecanismo no sea idóneo o eficaz por la categoría de los derechos fundamentales afectados o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

Sin embargo, la doctrina constitucional ha reiterado que al estar en juego la protección de los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y el debido proceso de quienes participaron en un concurso de méritos y fueron debidamente seleccionados, la Corte Constitucional asume competencia plena y directa, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial, al considerar que la tutela puede “desplazar la respectiva instancia ordinaria para convertirse en la vía principal de trámite del asunto”, en aquellos casos en que el mecanismo alterno no es lo suficientemente idóneo y eficaz para la protección de estos derechos.³

Así, en sentencia de tutela T-682 de 2018, la Corte reiteró que, en relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, la jurisprudencia esa Corporación ha orientado que, en principio, la acción de tutela debe declararse improcedente. Pero que no obstante lo anterior, el precedente de la Corte ha señalado que los medios de control de la jurisdicción contencioso administrativa, bien sea a través de la acción electoral, de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de la acción de reparación directa, no son los mecanismos idóneos y eficaces, en razón del prolongado término de duración que este tipo de procesos pudiese tener.

2.4.2 De los concursos de mérito.

El artículo 125 de la Constitución Política, establece que por regla general los empleos en los órganos del Estado deben ser de carrera administrativa, con algunas excepciones, en los siguientes términos:

“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

² Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
³ Corte Constitucional Sentencia SU-913 de 2009.

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.

De ahí que, el ingreso a los cargos de carrera en el Estado, deben fundamentarse en el mérito, en las calidades del servidor público y en una selección objetiva, para lo cual se ha establecido que, los concursos públicos son el instrumento o mecanismo idóneo que posibilita la evaluación y determinación de la capacidad de los aspirantes para asumir las funciones propias del cargo a desempeñar, impidiendo la subjetividad o arbitrariedad por parte del nominador.

2.4.3 Convocatoria – Ley del concurso.

De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia SU 913 de 2009, en la cual se pronunció sobre un Concurso Público para acceder a la Carrera Notarial, las personas concursan basados en unas reglas previamente establecidas por la Administración, suficientemente publicitadas y aceptadas, por todos las personas que participaron en el concurso, en concordancia con los principios de buena fe y confianza legítima en que se respetasen las reglas del concurso impuestas por el mismo Estado. Para el efecto citó un aparte de la sentencia C-878 de 2008:

"[...] el principio de transparencia de la actividad administrativa se empaña si en contravía de las legítimas expectativas del aspirante, su posición en el concurso se modifica durante su desarrollo; el principio de publicidad (art. 209 C.P.) se afecta si las reglas y condiciones pactadas del concurso se modifican sin el consentimiento de quien desde el comienzo se sujetó a ellas; los principios de moralidad e imparcialidad (ídem) de la función administrativa se desvanecen por la inevitable sospecha de que un cambio sobreveniente en las reglas de juego no podría estar motivado más que en el interés de favorecer a uno de los concursantes; el principio de confianza legítima es violentado si el aspirante no puede descansar en la convicción de que la autoridad se acogerá a las reglas que ella misma se comprometió a respetar; se vulnera el principio de la buena fe (art. 83 C.P.) si la autoridad irrespeta el pacto que suscribió con el particular al diseñar las condiciones en que habría de calificarlo; el orden justo, fin constitutivo del Estado (art. 22 C.P.), se vulnera si la autoridad desconoce el código de comportamiento implícito en las condiciones de participación del concurso, y, en fin, distintos principios de raigambre constitucional como la igualdad, la dignidad humana, el trabajo, etc., se ven comprometidos cuando la autoridad competente transforma las condiciones y requisitos de participación y calificación de un concurso de estas características. Adicionalmente, el derecho que todo ciudadano tiene al acceso a cargos públicos, consagrado en el artículo 40 constitucional, se ve vulnerado si durante el trámite de un concurso abierto, en el que debe operar el principio de transparencia, se modifican las condiciones de acceso y evaluación..."

1.4.4. El debido proceso.

El artículo 29 Superior, establece el derecho fundamental al debido proceso y prevé que éste es aplicable tanto en las actuaciones judiciales como en las administrativas, es decir, que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública, o a los particulares que ejerzan función

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

administrativa; este derecho fundamental, debe entenderse como una manifestación del Estado Social y Constitucional de Derecho que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio.

Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que límite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos.

La Corte Constitucional ha indicado que, al tratarse de un derecho de carácter complejo, la eficacia del derecho al debido proceso incorpora diferentes garantías, como son el principio de legalidad, el derecho de contradicción y defensa, el principio de publicidad y los principios de confianza legítima y buena fe. Como lo ha señalado la Corte, el derecho en comento se integra por las prerrogativas de (i) conocer el inicio de la actuación, (ii) ser oído durante todo el trámite, (iii) ser notificado en debida forma, (iv) que se adelante por autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (v) que no se presenten dilaciones injustificadas, (vi) gozar de la presunción de inocencia, (vii) ejercer los derechos de defensa y contradicción, (viii) presentar pruebas y a controvertir aquellas que aporte la parte contraria, (xix) que las decisiones sean motivadas en debida forma, (x) impugnar la decisión que se adopte, y (xi) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.

La Corte en sentencia SU913 de 2009 hizo referencia a la sentencia SU-133 de 1998, en la que explicó que se quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un perjuicio, cuando el nominador cambia las reglas de juego aplicables al concurso y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe.

En la misma providencia explicó la Corte que *“Cuando la confianza legítima en que un procedimiento administrativo será adelantado y culminado de conformidad con las reglas que lo rigen es vulnerada, se presenta una violación del debido proceso en la medida en que este derecho comprende la garantía de que las decisiones adoptadas por la administración lo serán de tal manera que se respeten las reglas de juego establecidas en el marco legal así como las expectativas que la propia administración en virtud de sus actos generó en un particular que obra de buena fe”*.

2.4.5. Derecho de petición.

El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, no radica simplemente en que se tramiten las solicitudes respetuosas presentadas por las personas ante las autoridades, en interés particular o colectivo, sino que, por expresa exigencia de la norma Superior, implica que el solicitante obtenga "pronta resolución".

En ese sentido, la Corte Constitucional ha considerado que el derecho de petición no tendría sentido si se entendiera que la autoridad ante quien se presenta una solicitud respetuosa cumple su obligación notificando o comunicando una respuesta apenas formal en la que no se resuelva sobre el asunto planteado. El derecho de petición lleva implícito un concepto de decisión material, real y verdadera, no apenas aparente. Por

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

tanto, se viola cuando, a pesar de la oportunidad de la respuesta, en esta se alude a temas diferentes de los planteados o se evade la determinación que el funcionario deba adoptar.

La Ley 1755 de 2015, regula el ejercicio del derecho de petición y señala los requisitos mínimos que debe contener la solicitud, el término para resolverse por la entidad respectiva, entre otros aspectos.

El artículo 14 ibídem, aplicable al derecho de petición en interés particular, señala el término para resolver las peticiones que se formulen, así:

«Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. *Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto (...).*».

Por lo anterior, el derecho de petición no impone a las autoridades la obligación de resolver en un determinado sentido las inquietudes de la parte solicitante, ya que el contenido del pronunciamiento de la administración se sujetará a cada caso en particular.

Sin embargo, lo que sí determina la eficacia de este derecho y le da su razón de ser, es la posibilidad que tiene cualquier persona de obtener una respuesta real y concreta a lo solicitado. Por consiguiente, la respuesta que la Administración otorgue deberá ser de fondo, clara, precisa y oportuna. Ni el silencio administrativo, ni una respuesta vaga e imprecisa, pueden satisfacer el derecho de petición, ya que no define ni material ni sustancialmente la solicitud del ciudadano.

Ahora, la Corte Constitucional, en Sentencia T-083-2017, ha señalado que no basta que la respuesta sea de fondo, sino que la misma debe ser debidamente notificada, ya que su notificación en un término oportuno, hace parte del núcleo esencial del derecho, señalando:

“Dentro de las garantías básicas del derecho de petición encontramos (i) la pronta resolución del mismo, es decir que, la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello y, (ii) la contestación debe ser clara y de fondo respecto de lo pedido; esto quiere decir que, debe pronunciarse materialmente respecto de todos los hechos puestos a consideración.

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

*La Corte Constitucional ha definido a través de su reiterada jurisprudencia en la materia, que el núcleo esencial de este derecho fundamental se encuentra constituido por la posibilidad de presentar la petición, la resolución integral de la solicitud sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva y **que la respuesta sea notificada dentro del término legalmente oportuno**” (subrayas propias).*

De ahí que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, independientemente del sentido de la respuesta; y así mismo esta sea debidamente notificada, pues en caso contrario no se satisfacen las garantías derivadas del derecho de petición.

2.5. Caso concreto.

2.5.1. De lo probado,

Viene acreditado que el accionante presentó reclamación respecto de la prueba escrita realizada el 10 de septiembre de 2023 en desarrollo de la UT Convocatoria Fiscalía general de la Nación 2022, cargo técnico investigador IV, concretamente, respecto a la pregunta 139, frente a la cual solicitó su revisión⁴:

- 2. **Ítem 139.** Para el caso asociado con el ítem 139, entre otros asuntos, se encuentra tema relacionado con **moneda colombiana incautada y su destinación o custodia** durante un procedimiento judicial.
En el ítem que refuto (139), respecto a la **destinación de dicho EMP y EF**, la Universidad Libre sugiere como respuesta correcta, su custodia a través del Banco de la República.

El 14 de junio de 2013, la Fiscalía General de la Nación se adhirió a la circular reglamentaria externa DFV, DTE-309 emitida por el Banco de la República, a través del cual, dicha entidad bancaria efectivamente recibía en custodia elementos como **dinero**, joyas, divisas, entre otros, como bien lo contempla el Manual del Sistema de Cadena de Custodia de la Fiscalía General de la Nación en su página 28.
Sin embargo, a partir de 01 de septiembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación suscribió **convenio interadministrativo N°00761700** con el Banco de la República vigente a la fecha (adjunto convenio), donde se regula de manera expresa el depósito en custodia de **ORO, PLATA, PLATINO o DIVISAS, no de moneda Colombiana.**

⁴ ExpedienteDigital, 01Tutela, folios 31-34.

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

En la actualidad, la moneda Colombiana incautada durante procedimientos judiciales, y para el caso concreto por parte de la policía judicial, **tiene como destino el BANCO AGRARIO**, donde la Fiscalía posee cuentas judiciales para dichos fines. Procedimiento del que puedo dar fe incluso de manera en ejercicio de funciones como Policía Judicial, que en repetidas oportunidades me ha correspondido realizar entregas de este tipo de elementos al Banco en mención. No con destino al Banco de la República como sugiere la respuesta de la Universidad Libre, quienes solo reciben divisas (moneda extranjera), cuyo procedimiento igualmente he tenido la oportunidad de realizar.

Quizás el error del planteamiento obedece a que el Manual del Sistema de Cadena de Custodia no actualizó en su momento, la información relacionada con el convenio realizado en el año 2017. Por ello, la respuesta sugerida por parte de la Universidad Libre NO ES CORRECTA.

Otra opción de respuesta que ofrece el ejercicio, es la entrega en custodia de dicho dinero, al almacén general de evidencias, circunstancia que tampoco es correcta, como expresamente lo establece el Manual de Cadena de Custodia en su página 28.

La opción que más se aproxima a una realidad teórica y práctica, sería la contemplada en el **literal C**, que tiene que ver con la entrega de este elemento al Laboratorio (sería con destinación al laboratorio de Documentología), quienes a través de actuación “análisis documentológicos” en desarrollo de actos urgentes (procedimiento que ofrece el portafolio contemplado en el Manual de Policía Judicial) y el “Protocolo inspección física de documentos impresos -FGN-MS02-06-PR-03, están en la posibilidad de establecer la autenticidad de estos billetes, con el fin de determinar posibles actividades delictivas relacionadas con la falsificación de monedas, comportamientos regulados a partir del artículo 273 del Código Penal. El mismo literal de respuesta contempla un elemento adicional que es la “custodia”, componente que podría interpretarse como una custodia transitoria, esto es, mientras se efectúa el correspondiente estudio del EMP y EF.

Así las cosas, de manera respetuosa, solicito reconsiderar la valoración de este ítem, y que **sea aceptada como respuesta correcta la del literal B**, por tratarse de la que más se acerca a la realidad, o en su defecto, se elimine dicha pregunta, dado que evidentemente, la respuesta que la Universidad Libre señala como correcta, NO LO ES, y en consecuencia se califique mi puntaje sobre las 99 preguntas restantes.

Igualmente se aportó respuesta emitida por el Coordinador General del Concurso de Méritos FGN 2022 frente a la reclamación presentada por el accionante. En la respuesta le informan que el diseño y construcción de las pruebas se llevó a cabo bajo el formato de prueba de juicio situacional y se desarrollaron las fases para elaborar el instrumento de medición, indicando que los ítems fueron construidos bajo una estructura funcional y pertinente para las pruebas aplicadas, y que, con posterioridad a la aplicación de la prueba, cada ítem se sometió a un análisis psicométrico por medio del cual se evaluó su pertinencia y validez con el fin de garantizar la calidad.

También le indicaron respecto a la pregunta 139 que la respuesta correcta era la opción c, y no la respuesta b (respuesta del accionante) explicando lo siguiente:

| Posición | Claves - Justificación | Marcadas aspirantes - Justificación |
|----------|------------------------|-------------------------------------|
|----------|------------------------|-------------------------------------|

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

| | | |
|-----|--|---|
| 139 | C - es correcta, porque de acuerdo al procedimiento de cadena de custodia con dinero, el empleado debe solicitar al Banco de la República la custodia de esta clase de evidencia, debido a que el almacén general no permite su ingreso por la naturaleza de la evidencia (Manual del Sistema de Cadena de Custodia, 2018, pag.28). El procedimiento con dinero lo | B - es incorrecta, porque de acuerdo al procedimiento de cadena de custodia, al ser necesitado el análisis, el empleado lo debe llevar al laboratorio de documentología donde reciben los elementos, realizan el análisis y luego devuelven las evidencias—los laboratorios no cumplen la función custodiar este tipo de EMP— para que el empleado las traslade al almacén competente para su custodia. Lo anterior se sustenta en el Manual del Sistema de |
|-----|--|---|

| Posición | Claves - Justificación | Marcadas aspirantes - Justificación |
|----------|--|--|
| | desarrolla la Circular Reglamentaria Externa- DFV, DTE – 309 (2014) del Banco de la República en el "ASUNTO: 110. DEPÓSITOS EN CUSTODIA; I. ANTECEDENTES: "(...únicamente podrá aceptar la constitución de depósitos en custodia a favor de terceros en los siguientes casos, de acuerdo con las normas vigentes que así lo establecen: a) A autoridades judiciales, administrativas o militares, en relación con sumas de dinero, divisas, títulos valores y otros bienes de similar naturaleza, decomisados en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 2272 de 1991 y las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan"(pág.110-1). | Cadena de Custodia (2018) en el ítem: "recepción y análisis de los EMP y EF en las unidades de recepción, descripción de actividades, ítem 10: iniciar el trámite interno de cada laboratorio para el envío del informe pericial a la autoridad correspondiente de los EMP y EF al almacén de evidencia"(pág. 28). En contraste, en este contexto se solicita la custodia del dinero al Banco de la república por la naturaleza del mismo. |

La parte actora allegó petición presentada ante el Banco de la República en la cual solicitó informar si de conformidad con la Circular Reglamentaria Externa DFV, DTE-309 del 14 de junio de 2013 emitida por el Banco de la República y el convenio interadministrativo 00761700 del 1 de septiembre de 2017 suscrito entre la Fiscalía y el Banco de la República, el Banco recibe por parte de la Fiscalía General de la Nación “DEPOSITOS EN CUSTODIA relacionados exclusivamente con MONEDA COLOMBIANA incautada durante procedimientos de carácter judicial.”⁵

Igualmente allegó la respuesta emitida por el Banco en el siguiente sentido:

⁵ ExpedienteDigital, 01Tutela, folio 48

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

Sobre el particular le informamos lo siguiente:

1. El recibo y manejo de depósitos en custodia por parte del Banco de la República se lleva a cabo en lo términos y condiciones señalados en la Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-309 “Depósito en Custodia”¹ y, en lo allí no previsto, por las normas pertinentes del derecho privado, especialmente aquellas referentes al contrato de depósito².

Dicha circular señala las entidades autorizadas para constituir depósitos en custodia; el alcance naturaleza y objeto de los mismos; los bienes que se pueden aceptar en custodia; los lugares habilitado para la constitución de los depósitos; el trámite de solicitud y recibo; la cancelación y restitución; e cambio de titular; extravío o pérdida del original de comprobante de depósito y la práctica de medida cautelares sobre los bienes depositados.

2. En este sentido, para efectos de la constitución de depósitos, la circular especifica en su Capítulo I que sólo podrán ser beneficiarias las siguientes entidades, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 1753 de 2015:

a. *“A la Fiscalía General de la Nación-Fondo Especial para la Administración de Bienes- y a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.: En relación con oro, plata, platino o divisas respecto de las cuales se apliquen medidas cautelares de carácter real, tanto en procesos de índole administrativo como judicial, y que hayan sido puestos por la autoridad competente a disposición de dichas entidades para su administración en los términos de ley, las cuales constituirán la custodia de estos activos en el Banco de la República en virtud de lo establecido en el artículo 152 de la Ley 1753 de 2015.*

Conforme a la norma citada, para poder atender favorablemente la constitución de un depósito en custodia de oro, plata, platino o divisas, la solicitud debe provenir directamente del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FGN) o de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE). En el caso del Fondo Especial para la Administración de Bienes cuando los bienes estén perseguidos en un proceso penal con fines de comiso o respecto de los cuales éste ya se hubiere declarado formalmente y se encuentren a cargo de dicho Fondo para su administración o disposición final. (Se subraya)

En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores y tomando en cuenta la normatividad vigente, el Banco de la República no constituye para la Fiscalía General de la Nación depósitos en moneda nacional.

2.5.2. Procedencia de la acción de tutela- Subsidiariedad.

Tal como se indicó en precedencia, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual solo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto (iii) o como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental.

En el presente caso el accionante presentó dentro del término establecido la reclamación frente a las pruebas escritas de la oferta para el cargo de técnico Investigador IV, reclamación resuelta por la demandada de forma negativa, decisión contra la cual no procede ningún recurso de conformidad con el artículo 20 del Acuerdo No. 001 de 2023 “Por el cual se convoca y establecen las reglas del concurso de méritos para proveer 1.056 vacantes definitivas en las modalidades ascenso e ingreso, de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera”.

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

No obstante, el señor Mauricio Gil inconforme con la respuesta dada frente al ítem 139 solicita el amparo de sus derechos fundamentales y que se emita una respuesta de fondo y concreta conforme a los argumentos por él planteados, en tanto la respuesta emitida no se pronuncia sobre el Convenio interadministrativo número 00761700 entre Fiscalía General de la Nación y Banco de la República al que hace referencia, expedido con posterioridad a la circular en citada en la respuesta y que regula el depósito en custodia de oro, plata, platino y divisas (no moneda colombiana); ni que es realmente el Banco Agrario de Colombia, la entidad bancaria encargada de recibir en calidad de depósito en custodia la moneda nacional incautada en ejercicio de estos procesos penales.

En este orden de ideas el accionante no dispone de otro medio de defensa judicial, para cuestionar la respuesta emitida por la accionada, toda vez que se reitera, contra la decisión emitida no procede recurso alguno y se trata de un acto de trámite, de ahí que no es enjuiciable. En este orden de ideas, el Despacho considera que se agota el requisito de subsidiariedad, por lo cual se procede a resolver de fondo sobre el asunto.

2.5.3. Solución al caso concreto.

En el sub examine el accionante pretende que se ordene a la UT convocatoria FGN responder de fondo la reclamación número 2023100004610, teniendo en cuenta los convenios vigentes entre la Fiscalía General de la Nación y Banco de la República, así como la normatividad relacionada con el Banco Agrario, en lo concerniente al depósito en custodia de moneda nacional, y de acuerdo con lo anterior, se ordene a la UT convocatoria FGN 2022, “calificar de manera objetiva el ítem 139”, teniendo en cuenta la respuesta señalada por el actor en desarrollo de la prueba funcional aludida, o en su defecto, se evalúe la posibilidad de eliminar el ítem 139 de la prueba funcional para la OPECE I-212-02 (146) Técnico Investigador IV, y en virtud de ello, recalificar y emitir puntaje final con base en las 99 preguntas restantes.

De acuerdo con las pruebas relacionadas allegadas y relacionadas anteriormente, el actor presentó reclamación ante la UT Convocatoria FGN 2022 debido a la inconformidad con algunas preguntas formuladas en la prueba escrita llevada a cabo para el cargo de técnico investigador IV, y concretamente respecto a la repuesta emitida frente al ítem 139, dice que la respuesta dada por la UT no es de fondo ni completa respecto a lo solicitado.

Se indica en la tutela que la pregunta 139 *“alude a la incautación de dinero en moneda colombiana durante un procedimiento judicial con fundamento en que podría ser producto de actividad delictiva, por lo tanto, susceptible de medida cautelar con fines de comiso o extinción del derecho de dominio conforme a la normatividad penal y procesal penal vigente”* y que las posibles respuestas eran:

- A Entrega en Almacén General.
- B. Laboratorio para análisis y custodia.
- C. Entrega en el Banco de la República.

En la respuesta a la reclamación del actor, la UT Convocatoria FNG 2022 dijo que la respuesta correcta es la opción “C” *“porque de acuerdo al procedimiento de cadena*

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

de custodia con dinero, el empleado debe solicitar al Banco de la República la custodia de esta clase de evidencia, debido a que el almacén general no permite su ingreso por la naturaleza de la evidencia (Manual del Sistema de Cadena de Custodia, 2018, pag.28). El procedimiento con dinero lo desarrolla la Circular Reglamentaria Externa- DFV, DTE-309 (2014) del Banco de la República en el "ASUNTO: 110. DEPÓSITOS EN CUSTODIA; I. ANTECEDENTES: "(...)únicamente podrá aceptar la constitución de depósitos en custodia a favor de terceros en los siguientes casos, de acuerdo con las normas vigentes que así lo establecen: a) A autoridades judiciales, administrativas militares, en relación con sumas de dinero, divisas, títulos valores y otros bienes de similar naturaleza, decomisados en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 2272 de 1991 y las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan"(pág.110-1)".

Igualmente explicó que la repuesta “B” es incorrecta porque “de acuerdo al procedimiento de cadena de custodia, al ser necesitado el análisis, el empleado lo debe llevar al laboratorio de documentología donde reciben los elementos, realizan el análisis y luego devuelven las evidencias—los laboratorios no cumplen la función custodiar este tipo de EMP—para que el empleado las traslade al almacén competente para su custodia. Lo anterior se sustenta en el Manual del Sistema de Cadena de Custodia (2018) en el ítem: "recepción y análisis de los EMP y EF en las unidades de recepción, descripción de actividades, ítem 10: iniciar el trámite interno de cada laboratorio para el envío del informe pericial ala autoridad correspondiente de los EMP y EF al almacén de evidencia"(pág. 28).En contraste, en este contexto se solicita la custodia del dinero al Banco de la república por la naturaleza del mismo”

No obstante, el actor sustenta que el Manual del Sistema de cadena de Custodia se encuentra desactualizado, porque de acuerdo con el convenio interadministrativo número 00761700, el Banco de la Republica no custodia la moneda colombiana: “*si bien, el Manual del Sistema de Cadena de Custodia en su página 28 (actualizado en 2018) cita la circular reglamentaria externa de DFV, DTE-309 emitida por el Banco de la República en 2013 (Anexo 6), a través de la cual, dicha entidad bancaria reglamenta la custodia de elementos como dinero, divisas, joyas y otros, el 01/09/2017 la Fiscalía General de la Nación suscribió convenio interadministrativo número 00761700 con el Banco de la República donde se regula de manera expresa el depósito en custodia de ORO, PLATA, PLATINO o DIVISAS, no de moneda colombiana (Anexo 7)*”, tal como le planteo en la reclamación formulada:

El 14 de junio de 2013, la Fiscalía General de la Nación se adhirió a la circular reglamentaria externa DFV, DTE-309 emitida por el Banco de la República, a través del cual, dicha entidad bancaria efectivamente recibía en custodia elementos como **dinero**, joyas, divisas, entre otros, como bien lo contempla el Manual del Sistema de Cadena de Custodia de la Fiscalía General de la Nación en su página 28. Sin embargo, a partir de 01 de septiembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación suscribió **convenio interadministrativo N°00761700** con el Banco de la República vigente a la fecha (adjunto convenio), donde se regula de manera expresa el depósito en custodia de **ORO, PLATA, PLATINO o DIVISAS, no de moneda Colombiana.**

En la actualidad, la moneda Colombiana incautada durante procedimientos judiciales, y para el caso concreto por parte de la policía judicial, **tiene como**

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

judicial, y para el caso concreto por parte de la Fiscalía General, **destino el BANCO AGRARIO**, donde la Fiscalía posee cuentas judiciales para dichos fines. Procedimiento del que puedo dar fe incluso de manera en ejercicio de funciones como Policía Judicial, que en repetidas oportunidades me ha correspondido realizar entregas de este tipo de elementos al Banco en mención. No con destino al Banco de la República como sugiere la respuesta de la Universidad Libre, quienes solo reciben divisas (moneda extranjera), cuyo procedimiento igualmente he tenido la oportunidad de realizar.

Quizás el error del planteamiento obedece a que el Manual del Sistema de Cadena de Custodia no actualizó en su momento, la información relacionada con el convenio realizado en el año 2017. Por ello, la respuesta sugerida por parte de la Universidad Libre NO ES CORRECTA.

Otra opción de respuesta que ofrece el ejercicio, es la entrega en custodia de dicho dinero, al almacén general de evidencias, circunstancia que tampoco es correcta, como expresamente lo establece el Manual de Cadena de Custodia en su página 28.

Como sustento de lo anterior, el actor allegó respuesta emitida por el Banco de la República, en el cual la entidad informa que el recibo y manejo de depósitos en custodia se lleva a cabo en los términos de la Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-309, y en ese sentido, para la constitución de depósitos en su capítulo I dice que sólo podrá ser beneficiaría la Fiscalía General de la Nación en relación con oro, plata, platino o divisas respecto de la cuales se apliquen medidas cautelares de carácter real ; y que no constituye para la Fiscalía general de la Nación depósitos en moneda nacional⁶:

En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores y tomando en cuenta la normatividad vigente, el Banco de la República no constituye para la Fiscalía General de la Nación depósitos en moneda nacional.

Conforme lo anterior, la respuesta emitida por el Coordinador General del Concurso de Méritos FGN 2022 no se pronuncia de manera completa clara y de fondo frente a todos los cuestionamientos planteados por la parte actora en la reclamación, en tanto se limita a decir que la opción C es correcta *“porque de acuerdo al procedimiento de cadena de custodia con dinero, el empleado debe solicitar al Banco de la República la custodia de esta clase de evidencia, debido a que el almacén general no permite su ingreso por la naturaleza de la evidencia”*, sin embargo no refuta los argumentos planteados por el actor en la reclamación cuando indica que efectivamente el Banco de la República recibía en custodia elementos como dinero, joyas, divisas, entre otros, pero, a partir de 01 de septiembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación suscribió convenio interadministrativo N°00761700 con el Banco de la República vigente a la fecha, donde se regula de manera expresa el depósito en custodia de ORO, PLATA, PLATINO o DIVISAS, no de moneda Colombiana; y que en la actualidad, la moneda Colombiana incautada durante procedimientos judiciales, tiene como destino el BANCO AGRARIO, donde la Fiscalía posee cuentas judiciales para dichos fines.

De acuerdo con lo anterior, se amparará el derecho de petición y debido proceso del accionante y se ordenará a la **U.T. CONVOCATORIA FGN 2022**. que proceda a dar respuesta de fondo, clara y completa a la reclamación presentada por el actor, pronunciándose sobre cada uno de los argumentos planteados y teniendo en cuenta los convenios vigentes entre la Fiscalía General de la Nación y Banco de la República y la

⁶ Tutela folio 29.

| | |
|------------------|---|
| Medio de control | Acción de tutela |
| Radicado | 05001-33-33-031-2023-00509-00 |
| Demandante | Mauricio Gil Mesa (CC. 15.370.222) |
| Demandada | -UT Convocatoria FNG 2022 -Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. |

respuesta emitida por el Banco de la República a la petición formulada por el accionante y aportada al presente trámite constitucional en la cual dice que “no constituye para la Fiscalía general de la Nación depósitos en moneda nacional”

En orden a lo anterior, también se ordenará a las accionadas que de encontrar viable los argumentos planteados por el accionante, deberán proceder a calificar de manera objetiva el ítem 139, y evaluar la posibilidad de eliminar ese ítem o adoptar las medidas necesarias para hacer una correcta evaluación a la pregunta.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide:

Primero. Amparar el derecho fundamental de petición y debido proceso del señor Mauricio Gil Mesa, por las razones expuestas.


Segundo. Ordenar a la **U.T. CONVOCATORIA FGN 2022** que dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a dar respuesta de fondo, clara y completa a la reclamación presentada por el actor, pronunciándose sobre cada uno de los argumentos planteados y teniendo en cuenta los convenios vigentes entre la Fiscalía General de la Nación y Banco de la República y la respuesta emitida por el Banco de la República a la petición formulada por el accionante y aportada al presente trámite constitucional en la cual dice que “no constituye para la Fiscalía general de la Nación depósitos en moneda nacional”

Tercero. Ordenar a la UT Convocatoria FNG 2022 y a la Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación que de encontrar acertados los argumentos planteados por el accionante en la reclamación, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, procedan calificar de manera objetiva el ítem 139, y evaluar la posibilidad de eliminar ese ítem o adoptar las medidas necesarias para hacer una correcta evaluación a la pregunta para todos los participantes.

Cuarto. Ordenar a las accionadas que publiquen por el termino de 5 días este fallo en el portal Web del Concurso, para efectos de notificación a los terceros interesados.

Quinto. Comunicar esta decisión a las partes y, de no ser impugnada, remitir a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,



Elías Daniel Pastrana Bustamante
Juez